El principio de proporcionalidad ante crímenes contra la humanidad en Chile (1973-1990). Un análisis a la luz del derecho internacional de los derechos humanos

*The principle of proportionality in the face of crimes against humanity in Chile (1973-1990).
An analysis in light of international human rights law*

Myrna VILLEGAS DÍAZ¹
Francisco Félix BUSTOS BUSTOS²

Resumen: El trabajo investiga la naturaleza, el *quantum* y el cumplimiento de las penas aplicadas en casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990. Se examinaron 15 casos con condenas, ocurridos tanto al inicio de la dictadura como en los años ochenta, con una víctima o más. El estudio evidenció incumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos debido a la afectación del principio de proporcionalidad en las penas. Aunque el cumplimiento efectivo ha mejorado en los últimos años, ha sido relativizado en algún periodo por un otorgamiento excesivo de beneficios extrapenitenciarios.

Palabras clave: Prescripción gradual, crímenes de lesa humanidad, principio de proporcionalidad.

Abstract: The paper investigates the nature, quantum and the enforcement of prison sentences in cases of serious human rights violations in Chile between 1973 and 1990. It analyzes 15 cases with convictions, some occurred at the beginning of the dictatorship, and others in the 80s, each of them with one or more victims. The study showed non-compliance with international human rights standards due to the affectation of the principle of proportionality in sentencing as well as effective compliance that, although high in recent years, has been relativized in some period due to an excessive granting of extra-penitentiary benefits.

Keywords: Gradual statute of limitations, crimes against humanity, principle of proportionality.

1 Profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Dra. en Derecho y posgraduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, España. Abogada por la Universidad de Chile. Santiago de Chile. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9874-7396>. Correo electrónico: mvillegas@derecho.uchile.cl.

2 Profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Máster en Derecho por las universidades de Bologna, de Chile y Diego Portales, becario doctoral ANID-DAAD Universidad de Münster. Münster, Alemania. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1013-7206>. Correo electrónico: fbustos@derecho.uchile.cl.

1. Introducción

Una icónica frase de Platón en *La República* dice que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Algo así ha ocurrido cuando de juzgamiento a crímenes de lesa humanidad se trata. La experiencia de estas atrocidades se vivió en la mayoría de los países iberoamericanos que han sufrido dictaduras militares, y el tratamiento ha sido disímil. Comenzando por la impunidad de los crímenes franquistas en España y pasando por la impunidad relativa a los crímenes cometidos por las dictaduras en el Cono sur. Nuestro país no es la excepción, y aunque algunos alardean que somos uno de los países que menos impunidad tiene en relación a los crímenes de la dictadura, lo cierto es que esta es una verdad a medias. Porque si la “no impunidad” implica investigación, juzgamiento y penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos, como veremos en este trabajo, Chile sigue al debe en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.

El objetivo de este trabajo ha sido investigar acerca de la naturaleza y *quantum* de las penas aplicadas en casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en nuestro país entre 1973 a 1990 y su cumplimiento, a 50 años del golpe de Estado, esto es, en procesos concluidos hasta 2023. Nuestra hipótesis es que Chile no ha cumplido cabalmente con la obligación de sancionar estos crímenes con penas proporcionales a la luz de las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos. Para ello se estudia la penalidad aplicada a 15 casos de violaciones a derechos humanos ocurridas a inicios de la dictadura y luego en la década de los ochenta, cada uno de ellos con una o más víctimas. La temporalidad es un factor relevante por las formas que adopta la represión estatal³, pero también —según se dirá— un factor determinante en la penalidad concreta es la fecha del juzgamiento, lo que puede ejemplificarse con la aplicación de la prescripción gradual, que resultó en que la mayoría de las penas impuestas entre 2008 a 2013 fueran remitidas. Los casos que se tomaron como referencia son⁴:

De los inicios de la dictadura:

1. *Caso Comando Conjunto (José Weibel y otros)*, diciembre de 1975 a marzo de 1976, 5 víctimas⁵.
2. *Episodio Parral*, 11 septiembre al 19 de octubre de 1973, 27 víctimas⁶.

³ De las matanzas masivas y consejos de guerra que caracterizaron los días posteriores al Golpe, se pasó a la desaparición forzada de opositores practicada por la DINA o el Comando Conjunto, Salazar, Manuel (2011), *passim*; González y Contreras (2023). Por su parte, la CNI se caracterizó por asesinatos presentados a la opinión pública como falsos enfrentamientos: Salazar (2016), *passim*.

⁴ Sentencias disponibles en: [www.expedientesdelarepresion.cl]. Toda referencia a la Corte Suprema de Justicia lo es a la Segunda Sala o Sala Penal de ella, salvo indicación contraria.

⁵ Corte Suprema: *Comando Conjunto, Episodio José Weibel Navarrete y otros*. Rol 18762-2019, sentencia de casación de 19 de julio de 2022.

⁶ Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencias de casación y de reemplazo de 27 de diciembre de 2007.

3. *Caso Lonquén*, 7 de octubre 1973, 15 víctimas⁷.
4. *Caravana de la Muerte (La Serena)*, 16 de octubre de 1973, 15 ejecutados⁸.
5. *Caravana de la Muerte (Valdivia)*, 3 y 4 de octubre de 1973, 12 víctimas⁹.
6. *Caso Víctor Jara y Littré Quiroga*, 12 al 15 de septiembre de 1973¹⁰.
7. *Operación Colombo, Episodio Pedro Poblete Córdoba*, 19 de julio de 1974, 1 víctima¹¹.
8. *Caso Operación retiro de televisores* (exhumación ilegal de desaparecidos de La Moneda), diciembre de 1978¹².
9. *Caso Paine, Episodio Principal*, 24 de septiembre a 3 de octubre, 8 a 16 de octubre de 1973, 38 víctimas¹³.

De la década de los ochenta:

1. *Caso Felipe Rivera Gajardo, José Carrasco Tapia, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein*, 8 de septiembre de 1986, 4 víctimas¹⁴.
2. *Episodio Hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo*, 29 de marzo de 1985, 2 víctimas¹⁵.
3. *Caso Jécar Nehgme*, 4 de septiembre de 1989, 1 víctima¹⁶.
4. *Caso Patricio González González*, 10 de diciembre de 1985, 1 víctima¹⁷.
5. *Operación Albania*, 15 y 16 de junio de 1987, 12 víctimas¹⁸.
6. *Caso Degollados*, 29 de marzo de 1985, 6 secuestros, 3 secuestros con homicidio (Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino)¹⁹.

Para verificar si estas penas han sido adecuadas o no a la gravedad de los delitos nos centraremos principalmente en dos aspectos: eventuales infracciones al principio de proporcionalidad de las penas, incluida la prescripción gradual como instituto de la determinación de la pena, y el

7 Corte Suprema: *Episodio Hornos de Lonquén*. Rol 30170-2017, sentencia de casación de 18 de junio de 2018.

8 Corte Suprema: *Caso Caravana, Episodio La Serena*. Rol 5780-2023, sentencias de casación y de reemplazo de 28 de diciembre de 2023.

9 Corte Suprema: *Caso Caravana, Episodio Valdivia*. Rol 122163-2020, sentencias de casación y de reemplazo de 16 de junio de 2023.

10 Corte Suprema: *Caso Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal*. Rol 7885-2022, sentencias de casación y de reemplazo de 28 de agosto de 2023.

11 Corte Suprema: *Operación Colombo, Episodio Pedro Poblete Córdoba*. Rol 50341-2020, sentencias de casación y de reemplazo de 8 de septiembre 2023. Se elige por su importancia en el proceso contra la amnistía, no obstante existen una docena de procesos por la Operación Colombo o el Caso de los 119 que han concluido.

12 Corte Suprema: *Exhumación ilegal desaparecidos desde "La Moneda"*. Rol 4087-2008, sentencia de casación de 13 de agosto de 2009.

13 Corte Suprema: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 149250-2020, sentencias de casación y de reemplazo de 14 de junio de 2022.

14 Corte Suprema: *Caso Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y José Carrasco*. Rol 2406-2008, sentencias de casación y de reemplazo de 13 de agosto de 2009.

15 Corte Suprema: *Episodio Hermanos Vergara Toledo*. Rol 7089-2009, sentencias de casación y de reemplazo de 4 de agosto de 2010.

16 Corte Suprema: *Caso Jécar Nehgme*. Rol 4427-2007, sentencia de casación de 28 de enero de 2009.

17 Corte Suprema: *Caso Patricio González*. Rol 206-2020, sentencia de casación de 15 de noviembre de 2022.

18 Corte Suprema: *Operación Albania*. Rol 1621-2006, sentencias de casación y de reemplazo de 28 de agosto de 2007.

19 Corte Suprema: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 31030-1994, sentencia de casación de 27 de octubre de 1995.

cumplimiento efectivo de tales penas. La revisión se realizará de acuerdo con los estándares que exige el derecho internacional.

2. Principio de proporcionalidad y *quantum* de las penas impuestas

El principio de proporcionalidad es uno de los límites al *ius puniendi* tanto en la creación como en la aplicación de las normas penales. La pena expresa la reprobación a una determinada conducta, cuya sanción debe graduarse en su severidad conforme a la gravedad de ese reproche. Por ello es que crímenes graves como delitos de lesa humanidad, siendo merecedores del mayor reproche penal, deben ser sancionados acorde con esa gravedad.

La muestra de sentencias estudiada arroja una infracción al principio de proporcionalidad debido a que no se considera en toda su dimensión la gravedad de los delitos cometidos y sus circunstancias en relación con las penas que se imponen

Cabe hacer presente que a la época de los hechos la legislación penal no contemplaba figuras que tipificaran los crímenes contra la humanidad²⁰, por lo que los tipos penales aplicables correspondían a la legislación penal común o especial vigente²¹. ¿Significa esto que las penas a aplicar a este tipo de infractores, en su *quantum*, han de ser las mismas que las que se aplican a otros infractores de ley penal común? La respuesta es negativa, y a lo largo de este trabajo veremos como en diferentes casos se han impuesto penas de muy diversa magnitud, generando desproporción por defecto.

Si bien es cierto que a nivel internacional no existen marcos penales rígidos en cuanto a las penas a aplicar en este tipo de crímenes, según la naturaleza o grado de ejecución del delito, sí existen parámetros consensuados a nivel internacional que pugnan por la aplicación de penas privativas de libertad efectivas²². En tal sentido, puede mirarse el artículo 77 del Estatuto de Roma, intitulado

20 Recién en 2009 se promulga la Ley N.º 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, la cual rige para el futuro.

21 Así, se aplicarán principalmente las figuras del Código Penal de 1874, vigentes a la época de los hechos.

22 Cárdenas y Fernández destacan el artículo 7.1 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas: “Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad”; el artículo 4.2 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”; y el Principio 1º de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias: “Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos”. Así: Cárdenas y Fernández (2018), p. 194.

“Penas aplicables”²³⁻²⁴, que contempla sanciones privativas de libertad. Al analizar la historia del instrumento, consta que todas las delegaciones coincidieron en que la pena privativa de libertad debía ser la principal pena²⁵. De igual modo, para Basso, en relación con el juzgamiento doméstico de crímenes internacionales, “[a]un cuando no se haya producido una armonización del Derecho aplicable, se debe procurar salvaguardar la consistencia valorativa en el tratamiento punitivo que se asigne a los crímenes internacionales” y, específicamente, “si se pretenden respetar las exigencias mínimas de consistencia valorativa en la distribución del castigo, los delitos más graves [...] deben recibir mayor pena que los que se consideren más leves”²⁶.

Por lo mismo, al aplicar la legislación nacional, tratándose de secuestros u homicidios que se cometieron no solo al amparo del Estado sino por el mismo Estado a través de organizaciones criminales como la DINA, la CNI y el Comando Conjunto, debe considerarse que los bienes jurídicos afectados trascienden a los de las víctimas individualmente consideradas y a sus familias, afectando a toda la comunidad. Es importante tener en cuenta que hay una jurisprudencia prácticamente uniforme que —correctamente— califica los hechos como crímenes de lesa humanidad, pero luego parece desentenderse de este ejercicio al imponer penas menos severas de las que corresponden²⁷.

Así también desde hace casi dos décadas la judicatura ha realizado lo que Cárdenas califica como “doble subsunción”²⁸, pues se considera que los ilícitos perpetrados durante la dictadura son delitos domésticos a efectos de la tipicidad y penas aplicables, y son crímenes contra la humanidad para efectos del derecho penal internacional²⁹. Sin embargo, pese a esta declaración, el deber de sancionar proporcionalmente estos crímenes internacionales es una deuda.

La proporcionalidad en las penas debe entenderse como la congruencia existente entre la gravedad del delito y la severidad de la pena a aplicar³⁰. No solo en cuanto a la sanción en abstracto asignada en cada tipo penal, sino también al fijar la pena en concreto por un hecho cometido. La proporcionalidad puede ser afectada tanto en cuanto a lo que dice relación con el condenado, caso

23 “Artículo 77. Penas aplicables

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes: a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”.

24 El Estatuto de Roma contempla también las Reglas de Procedimiento y Prueba (art. 21(1)(a) ER). La Regla 145 se refiere a la determinación de la pena para efectos de los artículos 77 y 78 ER.

25 Así: Fife (2016), p. 1882. El ER también resuelve problemas sobre la multiplicidad de delitos, no zanjados previamente en el derecho penal internacional. Véase Werle y Jessberger (2020), p. 325.

26 Basso (2019), p. 338.

27 Collins y Bustos (2025), pp. 116-117.

28 Cárdenas (2020), p. 149.

29 Como la imprescriptibilidad de la acción penal, prohibición de amnistía, la exclusión de defensas basadas en obediencia de órdenes, entre otros. Bustos (2024), p. 111.

30 Von Hirsch (1986), pp. 40 y ss. Entre nosotros, Silva (2023), pp. 122 y ss.

en el que nos encontramos frente a una desproporción por exceso, como desde el punto de vista de la obligación que tiene el Estado de castigar con cierta severidad determinadas conductas. Cuando eso no ocurre podríamos estar frente a una desproporción por defecto, constitutiva de impunidad, ya sea absoluta o relativa. En palabras de Mañalich, constituye una impunidad absoluta aquella situación en la que una persona no resulta penada debiendo serlo³¹. Una impunidad relativa es aquella en la que una persona no es penada en forma adecuada según la gravedad del delito que ha cometido³².

La Corte IDH, en el caso *Masacre de la Rochela vs. Colombia*, tratándose de crímenes graves como los de lesa humanidad resalta que la respuesta estatal frente a una transgresión debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad del autor, por lo que se debe establecer en función de la naturaleza y gravedad de los hechos. La pena establecida por sentencia judicial debe fundamentar los motivos por los cuales aplica la sanción correspondiente. La ponderación de la proporcionalidad en estos casos no solo debe hacerse considerando una garantía para el imputado, sino “que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos”, siendo incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos “la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”³³. En sentido similar, en el caso *Heliodoro Portugal vs. Panamá* señala que “la regla de proporcionalidad requiere que los Estados en el ejercicio de su deber de persecución, impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, y la participación y culpabilidad del acusado”³⁴.

En nuestro ordenamiento jurídico, incluso cuando el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado respecto de la proporcionalidad en el *quantum* de las penas aplicadas en casos de crímenes de lesa humanidad, sí ha sostenido que es acorde con este principio “la imposición de una pena mayor en consideración al resultado del delito”. En su opinión, no constituye una discriminación arbitraria³⁵. Por otra parte, y aun cuando el uso del *test* de proporcionalidad en su plenitud no ha sido una constante en la jurisprudencia del TC³⁶, parece claro que este *quantum* de la pena aplicado en estos casos no resistiría dicho *test*³⁷, pues no hay una relación entre los medios legítimos

31 Mañalich (2023 a), p. 139.

32 Mañalich (2021), p. 474; y Mañalich (2023 b), p. 8.

33 Corte IDH: *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia*, sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 191 y 196. Sobre el deber de proporcionalidad, véase: Corte IDH: *Caso Vargas Areco vs. Paraguay*, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 108; *Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala*, sentencia de 15 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 70 y 113; y *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago*, sentencia de 21 de junio de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 102.

34 Corte IDH: *Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186.

35 Arnold, Martínez y Zúñiga (2012), p. 91.

36 Arnold, Martínez y Zúñiga (2012), pp. 87-88.

37 En sentencia Rol 1182-08, de 22 de julio de 2008, el TC indicó que el *test* de proporcionalidad implica “perseguir fines lícitos, constituir la limitación un medio idóneo o apto para alcanzar tal fin y resultar el menoscabo o limitación al ejercicio del derecho, proporcional al beneficio que se obtiene en el logro del fin lícito que se persigue”.

utilizados (el derecho penal común) y el fin (legítimo) perseguido, esto es, garantizar la paz social y evitar la comisión de ilícitos similares mediante la imposición de sanciones acordes a la gravedad de los delitos cometidos.

En los casos revisados puede observarse que, en general, las penas aplicadas son las que corresponden por tales delitos como si de casos comunes se tratara, incluyendo la aplicación de penas sustitutivas como libertad vigilada y remisión condicional. Las penas, salvo excepciones³⁸, en su mayoría son bajas considerando la existencia de una organización criminal que operó al amparo del Estado cometiendo delitos de lesa humanidad. Esto es una “trivialización del terror”³⁹ producida por el uso de la herramienta jurídica común⁴⁰ para el tratamiento de crímenes que son de la más alta gravedad, por ejemplo, secuestros que culminaron en desapariciones forzadas. Si bien en algunos casos hay penas en principio altas —por ejemplo, 18 años en el caso *Comando Conjunto*—, se debe considerar que se trató de 5 personas secuestradas por un grupo de inteligencia militar, dedicado a la persecución de personas por motivos políticos que operaba al amparo del Estado, y que en el mismo caso hay otros condenados a 12 años, 5 años, y que al menos 4 de los responsables fallecieron en el intertanto de 2012, 2016, 2018 y 2021, sin cumplir pena alguna.

La infracción al principio de proporcionalidad es aún más evidente en aquellos casos en los que aplicándose la prescripción gradual, se llegó a castigar con penas totalmente inadecuadas a la gravedad de los delitos, imponiendo penas sustitutivas como la libertad vigilada y la remisión condicional. Por ejemplo, en el *Episodio Parral*, consistente en el secuestro de 15 personas y la sustracción de un menor, los autores fueron condenados a la pena de 5 años con beneficio de libertad vigilada. Otro lo fue a 4 años, con beneficio de libertad vigilada, por el secuestro calificado de 6 personas⁴¹.

En cuanto a los homicidios, las penas, salvo excepciones como el caso *Víctor Jara y Littré Quiroga*⁴², son también inadecuadas para la gravedad de los delitos cometidos. Así, en el caso de homicidio de Felipe Rivera Gajardo y otras 3 personas, 11 de los condenados tuvieron libertad vigilada⁴³, mientras que en el caso del homicidio de Jécar Nehgme ninguno tiene pena efectiva⁴⁴. Y aun en los casos en que por el *quantum* de la pena no hay pena sustitutiva, siguen siendo bajas. En el caso de

38 La pena de presidio perpetuo ha sido impuesta en pocos casos, especialmente de la primera época, salvo excepciones así: Corte Suprema: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 31030-1994, sentencia de 27 de octubre de 1995; Corte Suprema: *Caso Tucapel Jiménez*. Rol 3231-2003, sentencia de 9 de marzo de 2004; Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Juan Alegría*. Rol 71835-1998, sentencia de 19 de julio de 2000; Corte Suprema: *Operación Albania*. Rol 1621-2006, sentencia de 28 de agosto de 2007; y Corte Suprema: *Caso Pisagua (Michel Nash y otros)*. Rol 8945-2018, sentencia de 8 de febrero de 2021.

39 Mañalich (2023), pp. 46 y ss.

40 Considerando además que, en general, en estos procesos hay ciertas particularidades como la falta de aplicación de agravantes, la generosidad con las atenuantes, la prescripción gradual, entre otros, que tienen como resultado penas comparativamente menores a la delincuencia común. Así: Bustos (2023), pp. 113-118; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), párrs. 62-63.

41 Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de 27 de diciembre de 2007.

42 Corte Suprema: *Caso Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal*. Rol 7885-2022, sentencia de 28 de agosto de 2023.

43 Corte Suprema: *Caso Felipe Rivera Gajardo y otros*. Rol 2406-2008, sentencia de 13 de agosto de 2009.

44 Corte Suprema: *Caso Jécar Nehgme*. Rol 4427-2007, sentencia de 28 de enero de 2009.

los hermanos Vergara Toledo (1985), hay penas de 7 años para uno y 10 años y 1 día para el otro (nótese, por un homicidio calificado y un homicidio simple)⁴⁵; el caso de Patricio González (1985) también 10 años y 1 día⁴⁶. En el caso *Operación Albania* (1987), donde hubo 12 ejecutados, solo una persona, uno de los altos dirigentes, el director de la CNI, fue condenado a presidio perpetuo, otros 5 lo fueron como autores a 5 años con libertad vigilada, otro autor a 3 años y 1 día con beneficio de libertad vigilada, 2 autores de homicidio simple a 3 años con remisión condicional, entre otros⁴⁷. En el caso de la Caravana de la Muerte de La Serena, con 15 ejecutados en octubre de 1973, 2 de los autores fueron condenados a 10 años y 1 día⁴⁸.

De todas formas, era predecible que en los casos más mediáticos, tal vez por el horror o el carácter ignominioso de los hechos, las condenas hayan sido más altas. Así ocurre en los casos de Lonquén (penas de 20 años y 15 años⁴⁹), de Víctor Jara y Littré Quiroga (penas de 10 años y 1 día por secuestro calificado con grave daño reiterado y de 15 años y 1 día por homicidio calificado reiterado⁵⁰) y del caso *Degollados* (presidio perpetuo para autores de 9 secuestros, 3 de ellos seguidos de homicidio por los 3 profesores degollados. También hay penas de secuestro sin homicidio por las 6 personas que fueron secuestradas el mes anterior para obtener información acerca de los 3 docentes; en este último caso, la pena mayor es de 800 días, pasando por otra de 541 días, y respecto de 2 cómplices de dichos secuestros, penas de 60 días⁵¹).

En el caso *Paine, Episodio Principal*, con 38 víctimas, hubo 15 acusados; de ellos, en primera instancia se condenó como coautores a 4 oficiales a la pena de presidio perpetuo. Se condenó además como coautor de los 38 crímenes a un civil (empresario y latifundista) a 20 años de presidio, y por los mismos cargos y penas se sancionó a 6 suboficiales y exconscriptos. Otros 3 autores fueron condenados a 15 y 10 años de presidio, por haber participado 2 de ellos en 14 y 2 secuestros. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel aplicó por mayoría la prescripción gradual, rebajando las penas, e impuso a los más altos responsables, 2 oficiales y un civil, la pena de 15 años, 2 oficiales a 10 años, y los restantes partícipes a penas de 5 años y un día, y uno a la pena de 5 años⁵². Vale decir, 12 condenados como coautores de 38 homicidios calificados recibieron

45 Corte Suprema: *Episodio Hermanos Vergara Toledo*. Rol 7089-2009, sentencia de 4 de agosto de 2010.

46 Corte Suprema: *Caso Patricio González*. Rol 206-2020, sentencia de 15 de noviembre de 2022. En este caso, se mantiene la sentencia de la Ministra en Visita Sra. Marianela Cifuentes, y la misma se ajusta a los parámetros de otros fallos por homicidio del mismo tribunal. Sin embargo, sería interesante hacer una revisión de la jurisprudencia relativa a personas que ejercían resistencia contra la dictadura.

47 Corte Suprema: *Operación Albania*. Rol 1621-2006, sentencia de 28 de agosto de 2007.

48 Corte Suprema: *Caso Caravana, Episodio La Serena*. Rol 5780-2023, sentencia de 28 de diciembre de 2023.

49 Corte Suprema: *Episodio Lonquén*. Rol 30170-2017, sentencia de 18 de junio de 2018.

50 Corte Suprema: *Caso Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal*. Rol 7885-2022, sentencia de 28 de agosto de 2023.

51 Corte Suprema: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 31030-1994, de 27 de octubre de 1995.

52 Ministra en Visita Sra. Marianela Cifuentes, *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 4-2002, de 29 de octubre de 2019, parte resolutive; y Corte de Apelaciones de San Miguel: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 3221-2019, de 10 de noviembre de 2020. Sobre el detalle: Sferrazza y Bustos (2022), pp. 341-345.

penas de 15 años y un día a 5 años y un día. La Corte Suprema acogió los recursos de casación en el fondo anulando la sentencia por haber aplicado la prescripción gradual, pero no restituyó las condenas originales, sino que impuso a los 2 más altos responsables vivos la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, a 7 coautores penas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo⁵³. Si en un caso de estas características se excluye el presidio perpetuo, cabe preguntarse ¿ante qué casos sería pertinente?

La diferencia de penas en estos casos, que se ejecutan en condiciones más o menos similares, vulnera el principio de proporcionalidad ordinal, pues la sanción penal no ha sido la misma tratándose de casos de similar naturaleza y merecedores del mismo reproche, asignándose penas menos severas en varios casos, especialmente en aquellos donde se ha aplicado la prescripción gradual. En este sentido, convendría tener presente que, tal como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional, “la proporcionalidad de la pena constituye una materialización de la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”⁵⁴.

Ahora bien, la tendencia jurisprudencial advertida entre 2008 y 2013, que aplican penas excesivamente bajas considerando el tipo de delito, con penas sustitutivas, en algunos casos, parece haber tenido un giro a partir de 2014-2016, advirtiéndose penas más altas, especialmente acercándonos a los 50 años de conmemoración del Golpe de Estado.

3. Proporcionalidad y determinación de las penas

3.1 APLICACIÓN DE REGLAS CONCURSALES Y/O DE REITERACIÓN DE DELITOS

Una de las cuestiones que influye es la aplicación de reglas concursales. Por ejemplo, respecto de un secuestro seguido de homicidio, a veces se resuelve como un concurso aparente de leyes penales apreciando solo un homicidio calificado (en virtud del principio de consunción). En otros casos resuelven como un concurso ideal de delitos entre el secuestro simple y el homicidio, considerando un solo hecho que constituye dos o más delitos, aplicándose la pena mayor asignada al delito más grave (artículo 75 CP)⁵⁵. En caso de reiteración de delitos de la misma especie tiene aplicación

53 Corte Suprema: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 149250-2020, sentencia de reemplazo de 14 de junio de 2022, con la prevención del Ministro Sr. Llanos quien estuvo por imponer 15 años y un día.

54 STC Rol 6680-2019 INA, de 07.11.2019. En el mismo sentido, Rol 5932-19 INA, de 24.09.2019; Rol 2922-15 INA, de 29.09.2016; Rol 2254-12 INA, de 18.12.2012, entre otras.

55 Sobre el concurso ideal, véase: Mañalich (2024), pp. 139 y ss.

normalmente la regla de exasperación⁵⁶ del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal⁵⁷, que ordena aplicar la pena del delito que tenga asignada la pena mayor, aumentándola en uno, dos o tres grados⁵⁸. Esto en la medida que la regla del artículo 74 CP no resulte más beneficiosa para el sentenciado. Para Novoa, “[e]l número de grados que corresponderá aumentar en cada caso, lo ha dejado la ley entregado al criterio del juez, quien tiene una facultad discrecional, dentro de los límites legales, para fijar el monto del aumento. Pero, nótese, debe aumentar en caso de reiteración al menos un grado. Por cierto que a mayor número de delitos que integren la reiteración, mayor tendrá que ser, por lo general, el aumento de grados; otra cosa sería burlar la voluntad legislativa”⁵⁹.

Se destaca también que la consideración de atenuantes cumple un rol central.

En los casos analizados y cuando se reconoce un concurso ideal lo descrito es la regla general. No hay mayor preocupación por distinguir si hay unidad de hecho o si se trata de hechos diferentes, por ejemplo, cuando media un espacio temporal entre el secuestro y los homicidios. No obstante, en el caso de Víctor Jara fue diferente: se trató de un secuestro seguido de una ejecución posterior, lo que en otros casos ha sido considerado un solo delito de homicidio calificado. Pero aquí el fallo atiende principalmente a que las víctimas son detenidas en la UTE, llevadas al Estadio Chile junto con muchos otros detenidos, donde posteriormente se produce un traslado al Estadio Nacional. Sin embargo, Víctor Jara y Littré Quiroga fueron apartados de esos grupos junto a una tercera persona, conducidos a los subterráneos del Estadio, donde fueron ejecutados dos días después. Por ello hay a juicio del tribunal dos delitos: secuestro calificado con grave daño y homicidio calificado⁶⁰.

Respecto de la reiteración de delitos, en episodios como Parral, junto a la aplicación de la prescripción gradual, el sentenciado H. C. V. —condenado por 1 sustracción de menores y 16 secuestros calificados— fue condenado por el secuestro calificado, rebajado por el artículo 103 CP, y producto de la reiteración la pena fue aumentada únicamente en *un* grado⁶¹. Esto llevó a una pena de 5 años, sustituida por la libertad vigilada. En cuanto al coimputado P. C. G., condenado por 8 secuestros calificados, la pena fue a 4 años de libertad vigilada. En este caso, la reiteración de delitos también

56 Oliver (2013), p. 168.

57 Novoa (2005), p. 227.

58 En esto, la norma se diferencia del artículo 351 del Código Procesal Penal, que permite aumentar la pena solo hasta en dos grados.

59 Novoa (2005), p. 227.

60 Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Víctor Jara y Littré Quiroga*. Rol 4160-2018, sentencia de 23 de noviembre de 2021, considerandos 29° a 32°. Hay algunos fallos firmes similares que apreciaron concurso entre el secuestro simple y los apremios como secuestro con grave daño, aunque no es mayoritaria. Así: Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Londres 38. Torturas*. Rol 1550-2015, sentencia de 23 de mayo de 2016, considerandos 7° a 16°; Corte de Apelaciones de Santiago: *Episodio Eva Palominos y Patricia Zúñiga*. Rol 1104-2016, sentencia de 29 de agosto de 2017, considerandos 1° a 3°. Hemos defendido esta interpretación en Bustos (2019), pp. 385-387.

61 Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de 27 de diciembre de 2007, considerando 32°. La decisión de imponer la pena aumentada en un grado fue de la sentencia de reemplazo. En primera instancia se había aumentado en dos grados: Ministro Sr. Alejandro Solís, Rol 2182-98, *Episodio Parral*, sentencia de 4 de agosto de 2003, cons. 107° y 108°, condenándolo a la pena de 17 años, más accesorias.

significó el aumento en *un grado*⁶².

Respecto al caso *Paine, Episodio Principal*, por los crímenes de 38 personas, en primera instancia se aplicó a los más altos responsables: J. R. C., O. M. B., C. K. S. y A. F. R. la pena de presidio perpetuo, como coautores de 38 secuestros calificados, aplicando el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, incrementado en 3 grados⁶³. En segunda instancia se aplicó la prescripción gradual por mayoría, rebajando las penas⁶⁴. Por último, la Corte Suprema anuló la sentencia que aplicó la prescripción gradual, pero aun así la pena no recuperó su intensidad, imponiendo a J. R. C. y A. F. R. la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo⁶⁵. Por la reiteración se incrementó la pena, pero únicamente en *un grado*. Con todo, se ponderaron otros factores para imponer el grado máximo: “Que en el caso de Jorge Eduardo Romero Campos y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, la pena de presidio mayor en su grado medio a perpetuo correspondiente al delito de homicidio calificado, por la reiteración de conformidad al citado artículo 509 se aumentará en un grado, quedando en presidio mayor en su grado máximo a perpetuo, y concurriendo una minorante y ninguna agravante, como dispone el inciso 2° del artículo 68 del Código Penal, no se aplica el grado máximo de ese marco, esto es, el presidio perpetuo.

Y dentro de la pena resultante, presidio mayor en su grado máximo, se impondrá en su máxima cuantía dado el número de muertes —38—, el carácter de crímenes de lesa humanidad y el daño ocasionado con ellos hasta el día de hoy”⁶⁶.

Luego, aun aplicando la legislación vigente de la época, la jurisprudencia podría haber hecho o hacer más, apreciando la concurrencia de más de un delito. Otra cuestión que sorprende es que solo en algunos casos se ha condenado a personas por el delito de asociación ilícita⁶⁷. En materia de reiteración, también es problemático el resultado, pues en dos de los casos con decenas de víctimas, los tribunales superiores consideraron únicamente agravar la pena en 1 grado.

62 Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de 27 de diciembre de 2007, considerando 31°. En primera instancia también se aumentó en un grado, pero el resultado final fue una condena a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias. Véase: Ministro Sr. Alejandro Solís, Rol 2182-98, *Episodio Parral*, sentencia de 4 de agosto de 2003, cons. 109°.

63 Ministra en Visita Sra. Marianela Cifuentes, 04-2002 *Caso Paine, Episodio Principal*, sentencia de 29 de octubre de 2019, cons. 154°, letra (g)(1).

64 Corte de Apelaciones de San Miguel: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 3221-2019, sentencia de 10 de noviembre de 2020, considerandos 20° y 21°. Los condenados J. R. C., O. M. B. y el civil J. Q. J. quedarían condenados a 15 años de presidio mayor en su grado medio y los agentes C. K. S. y A. F. R. a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

65 Corte Suprema: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 149250-2020, sentencia de reemplazo de 14 de junio de 2022, cons. 5°-6°. Durante esta fase, se sobreescribió por fallecimiento a O. M. B., J. Q. J. y C. K. S.

66 Corte Suprema: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 149250-2020, sentencia de reemplazo de 14 de junio de 2022, cons. 6°.

67 En la jurisprudencia por regla general las organizaciones *de facto* sí se consideran asociación ilícita, así Comando Conjunto, COVEMA, el comité pre-DINA (es decir, hasta antes del Decreto Ley que la constituye). Por otro lado, los agentes de la DINA, CNI, ramas de la inteligencia militar, no se han considerado como tales. Una excepción es algún aparato operativo especial, como la DINA exterior en el *Caso Prats y Cuthbert*. Sobre dicho fallo, véase: Mañalich (2019), pp. 303 y ss.

También resulta cuestionable la no consideración de este tipo de hechos como actos de terrorismo. Al menos los casos que ocurrieron después de 1984 (fecha de la dictación de la ley de conductas terroristas). El único caso en el que existió aplicación de la ley de conductas terroristas por parte del ministro sumariante, Milton Juica, fue en el caso *Degollados*⁶⁸. Pero más tarde la Corte de Apelaciones revirtió esta calificación señalando que se trataba de delitos del CP⁶⁹.

En rigor, ninguno de los dos fallos es preciso en su explicación acerca del por qué sería o no aplicable la ley. Lo sucedido fue un problema de vigencia de la ley penal, pues conforme a la fecha de ocurrencia de los hechos, la ley aplicable era la Ley N.º 18.314 sobre conductas terroristas en su versión original (1984), sin embargo, en 1991 experimentó una reforma sustancial en sus tipos penales. La ley original establecía como delitos de terrorismo un catálogo de delitos, en los que se contemplaban, entre otros, los secuestros del artículo 5 b) de la ley de seguridad del Estado y la asociación ilícita terrorista (artículo 1, numerales 5 y 11). La Ley N.º 19.027 de 1991 sustituyó el artículo 1 de la Ley N.º 18.314, es decir, todos los tipos penales de terrorismo existentes a esa fecha, por una nueva formulación en los artículos 1 y 2, en la que estableció que los delitos de terrorismo (enumerados en el artículo 2) requerían de ciertas finalidades en el autor (elemento subjetivo). La sentencia de primera instancia señaló que aplicaría la Ley N.º 18.314 en su versión de 1991, pues resultaba más favorable a los reos, pero la Corte de Apelaciones indicó que al establecerse un nuevo tipo penal, diferente del anterior, eso significaba una derogación del artículo 1 que estaba vigente al momento de los hechos, y por tanto no podía aplicarse la ley original pero tampoco la nueva porque los delitos eran distintos, al menos en cuanto a la nueva exigencia de elementos relativos a la finalidad terrorista (elemento subjetivo). Así, estimó, recuperaba su vigencia la ley común, porque ninguna de las dos leyes antiterroristas resultaba aplicable al caso.

Considerar tales actos como delitos de terrorismo era sumamente importante⁷⁰, la justicia estaba indicando que lo cometido eran actos de terrorismo de Estado. Aunque esto no prosperó, las penas fueron más altas que en otros casos.

3.2 LA PRESCRIPCIÓN GRADUAL

El artículo 103 del CP establece una norma sin parangón en el derecho comparado⁷¹, que im-

68 Ministro en Visita Sr. Milton Juica, 6º Juzgado del Crimen de Santiago, *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 118.284, sentencia de 31 de marzo de 1994, considerandos 26º a 38º.

69 Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 16196-1994, sentencia de 30 de septiembre de 1994, considerandos 1º y 2º. La Corte Suprema confirmó esta sentencia al rechazar recurso de casación en el fondo y forma interpuesto por los condenados. Corte Suprema: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino*. Rol 31030-1994, sentencia de 27 de octubre de 1995.

70 Villegas (2018), p. 509.

71 Cabezas (2021), pp. 54-55.

plica una rebaja considerable de pena para quien se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción total, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige. En tal caso el tribunal deberá considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante.

Esta norma se ha aplicado muchas veces. Las razones de ello han sido caracterizadas como una solución de compromiso entre los integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal, buscando conjugar la condena penal con una rebaja importante, lo que fue ratificado en entrevistas⁷².

Según da cuenta Bustos en un informe para la Corte IDH en el caso *Vega González y otros*, de 452 procesos penales por crímenes de lesa humanidad concluidos entre 1995 y 2021, en 114 causas se aplicó el artículo 103 CP, es decir, casi en el 25% de los casos⁷³.

Para ilustrar cómo ha operado este instituto, volveremos al *Episodio Parral*, que trata sobre la investigación por el secuestro y desaparición de 27 personas, entre ellas un menor de 16 años de edad. La Corte Suprema por sentencia de 27 de diciembre de 2007, aplicando la prescripción gradual, condenó a algunos de sus autores a penas privativas de libertad de 5 y 4 años, concediéndose la pena sustitutiva de libertad vigilada. Sustituto o beneficio que otorga prescindiendo de la existencia de informes de libertad vigilada por parte de Gendarmería, por cuanto se trata de “documentos cuyo pronunciamiento no resulta vinculante para este tribunal”, considerando que los condenados cumplen de plano los requisitos para obtenerla, en atención “al largo tiempo transcurrido desde que se verificaron los hechos que dieron motivo a la formación de esta causa y la existencia de las hojas de vida de los acusados, en tanto funcionarios públicos”⁷⁴.

Para aplicar la prescripción gradual, la Corte Suprema de la época argumentó la existencia de un estado de conmoción interna, un “estado de guerra” en el país a la época de ocurrencia de los hechos, para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo contenida en el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y para todos los efectos de la mentada legislación, haciendo suyo lo indicado por los DL N.º 3 y 5 de 1973, y los DL N.º 640 y 641 de 1974. Y si bien considera que podrían llegar a aplicarse los Convenios de Ginebra y la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos, esto no alcanzaría a la norma del artículo 103 del CP por cuanto ella no se refiere a una prescripción propiamente tal, sino a una atenuación de la pena⁷⁵.

Esta sentencia es uno de los paradigmas de vulneración al derecho de acceso a la justicia para las víctimas, derecho que implica para el Estado la obligación de investigar e imponer sanciones que

72 Collins (2009), pp. 67-86.

73 Peritaje para la Corte IDH sobre la aplicación del artículo 103 CP en procesos por crímenes de lesa humanidad.

74 Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de 27 de diciembre de 2007, considerando 33º.

75 Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de 27 de diciembre de 2007, considerandos 14º a 19º.

sean proporcionales a la gravedad de los hechos. Es la única forma de asegurar una justicia efectiva para las víctimas, así como la garantía de no repetición de este tipo de situaciones⁷⁶.

En el caso del homicidio del periodista José Carrasco, hay 11 condenados a los que se les concedió libertad vigilada, y solo 3 con pena privativa de libertad efectiva. En el caso del asesinato de Jécar Nehgme, en donde se hace evidente la trivialización de la herramienta jurídica desde que la Corte Suprema declara que se trata de un simple acto criminal, un condenado es beneficiado con libertad vigilada y otros 5 con remisión condicional de la pena.

En otros casos no se ha aplicado la prescripción gradual pese a haberlo solicitado la defensa. No se hizo en los casos *Lonquén*, *Hermanos Vergara Toledo* ni *Comando Conjunto*, y en general, su uso disminuyó drásticamente desde 2013. En los últimos cinco años se ha aplicado apenas tres veces.

La prescripción gradual es un beneficio que no puede operar en estos casos. Tal como ha dicho la Corte Suprema en otros fallos, su inaplicabilidad deriva del carácter no amnistiable e imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, cuestión que alcanza también a la posibilidad de atenuación de la pena por el transcurso del tiempo. Las atenuantes de responsabilidad penal son circunstancias modificatorias que “atienden en todos los casos a la conducta del imputado fuera antes del hecho, durante el mismo o en forma posterior, pero siempre, a lo que aquel ha hecho desde antes de la comisión del delito (eximente incompleta del 10 N.º 1 y N.º 2; 11 N.º 6 [CP]), a lo que hizo en dicho momento (eximente incompleta del 10 N.º 4 a 12; 11 N.º 3, 4, 5, 10) o lo que hizo después (11 N.º 7, 8, 9), consistiendo todas ellas en actuaciones positivas”⁷⁷. Esto no ocurre en la circunstancia del artículo 103 del CP, que otorga una atenuación por el mero transcurso del tiempo. Y si el transcurso del tiempo no sirve para hacer prescribir, es decir, lograr la impunidad total de sus autores, tampoco podría servir para atenuarla. Es la condición objetiva del transcurso del tiempo la que constituye el fundamento de la atenuante, y la benignidad por el solo transcurso del tiempo en esta clase de crímenes está vedada⁷⁸.

La jurisprudencia más adelante varió este criterio en base a argumentos de derecho internacional, en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y en el deber de proporcionalidad. Sin embargo, en diversos procesos donde fue aplicado el artículo 103 CP se presentaron denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso *Vega González y otros* fue remitido a la Corte IDH en 2021 y se dictó sentencia en 2024⁷⁹. Versa sobre la denuncia de aplicación de la

76 Villegas y Flores (2020), pp. 142-144. Minuta INDH Sobre Indulto (2013). Disponible en línea en: [<http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/113/minuta-indulto.pdf?sequence=1>].

77 Corte Suprema: *Episodio Lonquén*. Rol 30170-2017, sentencia de 18 de junio de 2018, considerando 11º.

78 En el mismo sentido: Mañalich (2020), pp. 224-225.

79 Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Caso Vega González y otros vs. Chile*, sentencia de 12 de marzo de 2024 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

prescripción gradual en los procesos penales de 14 peticiones relativas a delitos de lesa humanidad perpetrados contra 48 personas en el contexto de la dictadura cívico-militar chilena, entre otros, los casos de los asesinatos del periodista José Carrasco, Felipe Rivera, y otros, y Jécar Nehgme. Sobre esto, es útil revisar el informe de fondo de la Corte IDH: “los Estados tienen la obligación de enjuiciar y castigar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. El juzgamiento y la imposición de una sanción adecuada a los responsables se encuentra protegido por los anteriores derechos toda vez que forma parte del derecho de acceso a la justicia. Para cumplir con tal fin, entre otros aspectos, los Estados deben observar el debido proceso y garantizar el principio de proporcionalidad de la pena y el cumplimiento de la sentencia”⁸⁰.

La sentencia se pronuncia en términos similares, declarando la vulneración de diversos derechos convencionales y ordenando entre sus formas de reparación, entre otros, que “[e]l Estado revisará y/o anulará las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia [...]”, y “[e]l Estado, dentro de un plazo razonable, deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de que la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena no sea aplicable bajo ningún término a delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, y hasta que no se haga dicha modificación deberá aplicar control de convencionalidad [...]”⁸¹.

La Corte IDH ha ordenado, pese a la oposición del Estado, la revisión o anulación de las penas, debiendo adecuar las sanciones impuestas en los 14 procesos objeto de la denuncia. La pregunta pertinente que se plantea es la siguiente: ¿qué hacer respecto de casi un centenar de casos restantes? Nos parece que, una vez que el Estado o la judicatura chilenos determinen el mecanismo para la revisión, anulación o modificación de las penas impuestas, esta solución debe hacerse extensiva también a los demás casos. Lo anterior se apoya tanto en los deberes reforzados respecto de la lucha contra la impunidad, con fundamento en normas convencionales, consuetudinarias y de *ius cogens*, en el deber de aplicar el control de convencionalidad *ex officio* que recuerda el propio tribunal regional⁸², y por último, por la necesaria igualdad ante la ley. No sería una solución justa mantener casi cien sentencias con resultados de impunidad, si existe un remedio jurídico aplicable para situaciones similares. Esta eficacia expansiva ha sido característica de las sentencias de la Corte IDH en nuestro país en materias de justicia transicional, lo que ha ayudado a posibilitar el proceso de juzgamiento.

80 CIDH (2021): Informe No. 72/21, Caso 13.054. Informe de Fondo. *Arturo Benito Vega González y otros vs. Chile*, de 16 de abril de 2021, párr. 251.

81 Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Caso Vega González y otros vs. Chile*, sentencia de 12 de marzo de 2024 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), puntos resolutivos 10 y 14.

82 Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Caso Vega González y otros vs. Chile*, sentencia de 12 de marzo de 2024, párrs. 309 y 310.

4. Cumplimiento de penas

De acuerdo a las cifras de Gendarmería al 7 de julio de 2024, hay 379 personas cumpliendo condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, distribuidos principalmente en dos centros de cumplimiento penitenciario: 135 en el penal de Punta Peuco y 182 en Colina 1.

Las edades oscilan entre los 58 años y los 90.

A 50 años del Golpe de Estado la cifra de reclusos era relativamente baja si consideramos que entre 1973 y 1990, unos 827 funcionarios de Carabineros, PDI y del Ejército habían sido destinados a la DINA y a la CNI⁸³. Sin considerar que muchos delitos cometidos en 1973 y los primeros años de la dictadura no lo fueron en el marco de operaciones de inteligencia, sino por conscriptos o funcionarios comunes (no personal de inteligencia).

En la escasez de penas de cumplimiento efectivo no solo ha influido el instituto de la prescripción gradual, sino también la libertad condicional, tendencia que inició en 2015 con la libertad condicional otorgada al sentenciado A. S. M., quien al estar condenado a presidio perpetuo solo pudo postular habiendo cumplido 20 años de pena efectiva. En este caso, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones denegó el beneficio por no encontrarse rehabilitado. Esto motivó la presentación de una acción constitucional de protección que concedió la libertad condicional, fallo confirmado por la Tercera Sala (Constitucional) de la Corte Suprema, que ni siquiera escuchó alegatos⁸⁴.

Con todo, la Tercera Sala parece haber tomado nota del revuelo e indignación que causó la decisión, y los futuros recursos de protección fueron declarados inadmisibles por dicha magistratura, indicando que la vía idónea para futuros reclamos debía ser la acción constitucional de amparo o *habeas corpus*, radicada en la Segunda Sala (Penal). Entre 2016 a 2018 se conocieron casi 40 amparos por libertad condicional, rechazándose más de la mitad, aunque el tema solo volvería a la palestra cuando a mediados de 2018 se otorgó la libertad condicional a varios condenados por crímenes contra la humanidad. La Corte Suprema la concedió a 6 condenados por crímenes de lesa humanidad, generando así la indignación de sobrevivientes, familiares de víctimas y la sociedad civil, llevando incluso a la acusación constitucional en contra de algunos ministros de dicho tribunal, la

83 [[https://www.ciperchile.cl/2023/09/08/papeles-de-la-dictadura-los-agentes-dina-y-cni-que-al-retorno-de-la-democracia-siguieron-ascendiendo-en-la-pdi-carabineros-y-ejercito/#:~:text=El%20Ej%C3%A9rcito%20fue%20la%20rama,438%20suboficiales%20\(ver%20documento\)](https://www.ciperchile.cl/2023/09/08/papeles-de-la-dictadura-los-agentes-dina-y-cni-que-al-retorno-de-la-democracia-siguieron-ascendiendo-en-la-pdi-carabineros-y-ejercito/#:~:text=El%20Ej%C3%A9rcito%20fue%20la%20rama,438%20suboficiales%20(ver%20documento))].

84 Corte Suprema: Sáez Mardones, Alejandro y otro / Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago. Rol 9331-2015, sentencia de 11 de agosto de 2015.

que fue rechazada.

La concesión de este tipo de beneficios pugna con la obligación estatal de sancionar con penas adecuadas esta clase de delitos, esto es, proporcionadas a la gravedad de los crímenes cometidos. En este punto, una de las cuestiones que llamaba la atención en las resoluciones de la Corte Suprema era que entendía que no existía ni era posible la reinserción social de estos condenados por su avanzada edad, por lo que no tenía sentido continuar con su privación de libertad dado que la pena no había cumplido esos fines de reinserción. Frente a ello, cabía objetar que la libertad condicional era más bien la culminación de todo un proceso de reinserción social que comenzaba con el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios previos, como la salida dominical, la salida diaria, en torno a los cuales existían restricciones para su otorgamiento en caso de crímenes de lesa humanidad, no así en ese momento respecto de la libertad condicional⁸⁵. Luego, era contrario a su fundamento el otorgarla así sin más, sin atender a la rehabilitación.

Sin embargo, y con lo discutible que podía resultar este argumento a la luz de la normativa vigente de la época, donde se polemizaba acerca de si la libertad condicional era un beneficio o un derecho, no se ponderaba adecuadamente la gravedad de los delitos, mostrando nuevamente esta trivialización en el uso del derecho por cuanto la discusión giraba en torno a los mismos tópicos que si de delincuentes comunes se tratara.

Por otra parte, y considerando la naturaleza de los crímenes cometidos, unido a que en estos casos no había existido colaboración para el éxito de las investigaciones, era patente que el fin de la pena es la retribución y, por lo mismo, ellas deben ser proporcionales a la gravedad del delito, y ser efectivas. No procede, a nuestro juicio, desde el punto de vista dogmático-jurídico, ningún beneficio que suponga el dejar de cumplir la pena en un recinto penitenciario.

Frente al *Supremazo*⁸⁶, la Comisión IDH expresó su preocupación indicando que “[l]a aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos”⁸⁷.

85 Durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se reformó el DS 518 (vía DS 924 de 2016), incorporando exigencias del derecho internacional, pero la Corte Suprema, ante unos requisitos legales menos estrictos que los reglamentarios, hacía primar el DL 321. Posterior a las modificaciones legales del DL 321, el Presidente Piñera, durante su segundo mandato, entregó beneficios e indultos a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Así: [<https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/12/entre-gallos-y-media-noche-abogados-de-dd-hh-denuncian-que-ministro-de-justicia-esta-rebajando-penas-a-condenados-por-delitos-de-lesa-humanidad/>].

86 Bustos (2020), p. 3.

87 CIDH Expresa preocupación por otorgamiento de libertad condicional a condenados por graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Disponible en línea: [<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>].

Esto llevó a que se promulgara la Ley N.º 21.124, del 18 de enero de 2019, que modificó el Decreto Ley N.º 321, de 1925, sobre libertad condicional, ley que dispuso exigencias más estrictas para el otorgamiento del beneficio en este tipo de casos. Aclaró que se trata de un beneficio (y no un derecho), por lo que deben cumplirse los requisitos tendientes a mostrar que se está apto para reintegrarse a la sociedad, entre ellos tener una conducta intachable y un informe psicosocial que contenga un pronóstico favorable para la reinserción, que son exigencias comunes para todo condenado. Pero además de ello, esta ley establece: a) que hayan cumplido 2/3 de la pena o en caso de presidio perpetuo simple 20 años de privación de libertad efectiva, y en el caso de presidio perpetuo calificado, 40 años de privación de libertad efectiva; y b) acreditar la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo, o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza. Esto se acredita con la sentencia, cuando se considera alguna de las atenuantes del artículo 11, N.º 8 y 9, del Código Penal, o con un certificado que así lo reconozca expedido por el tribunal competente.

Con el fin de determinar si es procedente la concesión del beneficio, se valorará, además, los siguientes factores:

- a. Si el otorgamiento de la libertad condicional no afectare la seguridad pública por el riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza;
- b. Si el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones durante la etapa de investigación y enjuiciamiento, en particular colaborando en la localización de los bienes sobre los que recaigan multas, comisos o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas, y;
- c. Si con el otorgamiento de la libertad condicional pudiese presumirse que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares.

Con esta ley el otorgamiento de libertades condicionales en este tipo de delitos se ha hecho más escaso. El talón de Aquiles para quienes postulan es la acreditación de la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito, haber confesado su participación en el mismo o haber aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales similares⁸⁸. Desde 2019 y hasta fines de 2023, ningún sentenciado por delitos de lesa humanidad obtuvo libertad condicional. En un caso, por un error de la secretaría de un tribunal, se discutió su procedencia a petición de la defensa, pero el tribunal la denegó:

“Quinto: Los fundamentos por los cuales la Comisión de Libertad Condicional optó por unanimidad rechazar la concesión del beneficio tienen relación con que el interno no cumplía

⁸⁸ Véase el comentario sobre los requisitos para obtener la libertad condicional por crímenes de lesa humanidad en Bustos (2021).

los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 3 bis del Decreto Ley N.º 321, al no encontrarse acreditada la circunstancia de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito, o confesado su participación en el mismo, o que aportara antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza, pues según constaba en la sentencia condenatoria del imputado, no se le reconoció al condenado la atenuante de colaboración sustancial, sin que existiera otro antecedente que acreditara la colaboración exigida por la norma, haciendo constar que si bien se había agregado a la carpeta certificación que daba cuenta de una situación diversa, era claro de la lectura de la sentencia de reemplazo, dictada por la Excma. Corte Suprema, que no existía atenuante reconocida, al efecto, al ser eliminado en forma expresa el considerando de la sentencia de primera instancia que se la reconocía.

Añadió, en relación al numeral 3 del artículo ya citado, que el postulante aun no externaliza su responsabilidad, falta de conciencia del daño que resulta más relevante respecto del delito por el cual ha sido condenado, relevancia que deja patente la última modificación del referido Decreto Ley, al incorporar nuevos requisitos para otorgar el beneficio en cuestión⁸⁹.

Finalmente, quisiéramos referirnos a la desigualdad en el tratamiento penitenciario que existe respecto de buena parte de quienes se encuentran privados de libertad por esta clase de crímenes.

Desde hace un tiempo se discute sobre el cierre del penal de Punta Peuco, cuestión que engarza con sendas iniciativas legales para sustituir la pena privativa de libertad de mayores de 75 años por arresto domiciliario. Esto no es nuevo, desde hace años se han impulsado varios proyectos de ley, e incluso recientemente fue incluida una iniciativa en el proyecto del Consejo Constitucional rechazado por la ciudadanía en diciembre de 2023⁹⁰.

Creemos que aplicar una regla similar a personas que han cometido delitos de lesa humanidad vuelve ineficaces los estándares internacionales de derechos humanos que pugnan por penas adecuadas a la gravedad de los crímenes. Más aún, privan al reproche penal de su fuerza comunicativa en cuanto mensaje que expresa una condena especialmente fuerte para este tipo de crímenes. Debilitan el principio de merecimiento de pena, y también el de necesidad de pena.

89 Corte de Apelaciones de Santiago: *Pérez Martínez, Rodrigo con Comisión de Libertad Condicional*. Rol 360-2020 (Amparo), sentencia de 28 de febrero de 2020, cons. 5º. Fallo confirmado por unanimidad. Así: Corte Suprema, Rol 24962-2020, sentencia de 11 de marzo de 2020. El proceso aludido es: Corte Suprema: *Episodio Los 5 desaparecidos de 1987*, Rol 8642-2015, sentencia de 21 de marzo de 2017.

90 Su artículo 16 N.º 4, letra h, disponía: “Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.

5. Conclusiones

El presente estudio de 15 casos de delitos cometidos por agentes estatales bajo la dictadura evidencia una infracción al principio de proporcionalidad debido a las penas aplicadas, consideradas en relación a la gravedad de dichos crímenes. Aunque se ha avanzado por parte de los tribunales en imponer sanciones más adecuadas en los últimos años, persiste la disparidad en las condenas, especialmente en casos donde se aplicaron figuras como la prescripción gradual. Pero también la figura de la reiteración, incluso en casos con multiplicidad de víctimas, como el *Episodio Parral* o el caso *Paine Principal*, por regla general se ha empleado únicamente para subir las penas en un grado.

La aplicación del artículo 103 del Código Penal ha permitido rebajas significativas de penas en cerca del 25% de los casos de lesa humanidad concluidos hasta la fecha, lo que ha generado impunidad relativa. Este mecanismo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile, pues debilita el reproche penal hacia estos crímenes al aplicar penas tan bajas que representan una forma de impunidad. El fallo *Vega González* marca un hito al ordenar la revisión y/o anulación de estas reducciones, sentando un precedente que obliga a eliminar este instituto para delitos de lesa humanidad.

Sobre el cumplimiento de la sentencia *Vega González vs. Chile*, atendida la preeminencia del deber de terminar con la impunidad, el deber de control de convencionalidad y la igualdad ante la ley, somos partidarios de implementar un mecanismo judicial expedito para revisar todas las sentencias que incluyeron la aplicación de la prescripción gradual, que sea aplicable no solamente a los 14 procesos que motivaron las denuncias, sino también a casi un centenar de otros casos.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las penas, las cifras reflejan que ha aumentado el cumplimiento de estas sanciones en cantidad. Sin embargo, durante el periodo 2015-2018 hubo un otorgamiento excesivo de beneficios como la libertad condicional en casos donde no se cumplen los estándares de rehabilitación ni las condiciones exigidas por el derecho internacional. La Ley N.º 21.124 estableció criterios más estrictos a la luz de las obligaciones del Estado.

La eliminación de beneficios injustificados para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y la imposición de penas proporcionales no solo cumplen con los estándares internacionales, sino que fortalecen el mensaje de rechazo institucional y social hacia este tipo de crímenes. Esto reforzaría el compromiso del Estado chileno con la verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición de crímenes contra la humanidad.

Bibliografía citada

- Arnold, Rainer; Martínez, José y Zúñiga, Francisco (2012): “El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional”, en *Estudios Constitucionales* (Vol. 10, N.º 1), pp. 65-116.
- Basso, Gonzalo (2019): *Determinación judicial de la pena y proporcionalidad con el hecho* (Madrid, Marcial Pons).
- Bustos, Francisco (2019): “Recalificación de aplicación de tormentos a secuestro calificado”, en *Revista de Ciencias Penales*, 46 (Anual), pp. 381-396.
- Bustos, Francisco (2020): “Libertad condicional y crímenes de lesa humanidad. Comentario a una sentencia del Tribunal Constitucional (Rol 6985-19-INA) sobre el DL 321 reformado”, en *Observatorio de Justicia Transicional UDP*, Boletín informativo N.º 57, enero y febrero de 2020.
- Bustos, Francisco (2021): “Sobre los requisitos para obtener la libertad condicional por crímenes de lesa humanidad, a propósito del caso Dirigentes de Chilean Autos (CS Rol 154.838- 2020)”, en *Observatorio de Justicia Transicional, UDP*, Boletín informativo N.º 63, enero y febrero de 2021.
- Bustos, Francisco (2023): *La circunstancia agravante del artículo 12 N.º 8 del Código penal y su (in)aplicación en causas sobre crímenes de lesa humanidad. Un análisis de la jurisprudencia chilena (1993-2020)* (Santiago, Editorial Ius Civile).
- Bustos, Francisco (2024): “¿Qué le ocurrió al paladín enmascarado? Sobre los fines de la pena en relación con las obligaciones de poner fin a la impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad”, en Contesse, Javier y Silva, Guillermo (Coords.), *Racionalidad y escepticismo en el Derecho penal. Estudios en Memoria de Miguel Soto Piñeiro* (Santiago, Thomson Reuters) pp. 97-123.
- Cabezas, Carlos (2021): *Prescripción de la acción penal* (Santiago, DER).
- Cárdenas, Claudia (2020): “¿Qué actos pueden constituir un ataque contra una población civil en la tipificación de crímenes de lesa humanidad de la Ley N.º 20.357?”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* (N.º 55), pp. 131-155.
- Cárdenas, Claudia y Fernández, Karina (2018): “Estándares internacionales para legislar en Chile sobre la libertad condicional de responsables de crímenes de lesa humanidad”, en *Revista de Ciencias Penales*, 45 (Anual), pp. 185-206.

- Collins, Cath (2009): “Human Rights Trials in Chile during and after the Pinochet Years”, en *The International Journal of Transitional Justice* (Vol. 4, N.º 1), pp. 67-86.
- Collins, Cath y Bustos, Francisco (2025): “Justice after Pinochet: Cases in Chile Post-1998”, en Infante-Batiste, Valentina y Wilkinson, Richard (Eds.), *Fifty Years of Human Rights in Chile. Essays in Honour of Alan Angell* (Londres, Palgrave Macmillan) pp. 105-128.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022): *Situación de Derechos Humanos en Chile*, OAS. Documentos oficiales OEA/Ser.L/V/II. [Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf]. [Fecha de consulta: 7 de enero de 2025].
- Fife, Rolf Einar (2016): “Article 77. Applicable penalties”, en Triffterer, Otto y Ambos, Kai (Eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*, 3º ed. (Munich, Editorial C. H. Beck Hart, Nomos) pp. 1877-1890.
- González, Mónica y Contreras, Héctor (2023): *Comando Conjunto. El grupo de exterminio más secreto de la dictadura*, Ed. revisada y actualizada (Santiago, Editorial Catalonia – Periodismo UDP).
- Oliver, Guillermo (2013): “La exasperación de la pena en el concurso material de delitos: la reiteración de delitos de la misma especie”, en *Revista de Derecho* (Valdivia) (Vol. 26, N.º 2), pp. 167-188.
- Mañalich, Juan Pablo (2019): “La estructura típica de la asociación ilícita: el Caso Prats”, SCS, 08/07/2020, Rol N.º 2596-09”, en Vargas, Tatiana (Dir.), *Casos Destacados. Derecho Penal. Parte Especial* (Santiago, Editorial DER) pp. 303-334.
- Mañalich, Juan Pablo (2020): “Homicidio alevoso, intervención delictiva y prescripción gradual. Comentario a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso ‘Villa Grimaldi’ (rol 1734-2017)”, en *Revista de Estudios de la Justicia* (N.º 32), pp. 209-227.
- Mañalich, Juan Pablo (2021): “Cosa juzgada fraudulenta en el caso quemados”, en *Revista Política Criminal* (Vol. 16, N.º 31), pp. 456-491.
- Mañalich, Juan Pablo (2023a): *Derecho penal y terrorismo de Estado. Problemas de justicia transicional a 50 años del golpe de Estado* (Santiago, Editorial Roneo).
- Mañalich, Juan Pablo (2023b): “Proporcionalidad de la pena y prescripción gradual”, informe pericial Caso “Vega González y otros Vs Chile”, 26 de enero de 2023.

Mañalich, Juan Pablo (2024): “El concurso ideal: función, estructura y límites. Sobre el concepto de unidad de hecho y el problema. Del ‘dolo alternativo’”, en Peñaranda, Enrique y Pozuelo, Laura (Dirs.), *Una propuesta de reforma para la regulación racional de la concurrencia delictiva en el Código penal español* (Madrid, BOE) pp. 139-165.

Novoa, Eduardo (2005): *Curso de Derecho Penal. T. II* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile), 3° ed.

Salazar, Manuel (2011): *Las letras del horror. Tomo I: La DINA* (Santiago, Editorial LOM).

Salazar, Manuel (2016): *Las letras del horror. Tomo II: La CNI* (Santiago, Editorial LOM), 2° ed.

Sferrazza, Pietro y Bustos, Francisco (2022): “Persecución judicial de la complicidad económica y de civiles por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Chile”, en Galain, Pablo y Saad-Diniz, Eduardo (Eds.), *Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo* (Valencia, Tirant Lo Blanch) pp. 331-371.

Silva, Guillermo (2023): “La proporcionalidad de las penas. Un comentario sobre el principio de proporcionalidad en la propuesta de Constitución chilena de 2022”, en Ambos, Kai y Guzmán, José Luis (Dirs.), *Constitución y Derecho penal en Chile* (Santiago, Editorial DER) pp. 119-148.

Villegas, Myrna (2018): “Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2016)”, en *Revista Política Criminal* (Vol. 13, N.º 25), pp. 501-547.

Villegas, Myrna y Flores, Nicolás (2020): “Libertad condicional en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, en Acevedo, Nicolás; Collado, Rafael y Mañalich, Juan Pablo (Coords.), *La justicia como legalidad. Estudios en homenaje a Luis Ortiz Quiroga* (Santiago, Thomson Reuters) pp. 127-148.

Von Hirsch, Andrew (1986): *Past or Future Crimes. Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals* (Manchester, Editorial Manchester University Press).

Werle, Gerhard y Jessberger, Florian (2020): *Principles of International Criminal Law* (Oxford, Editorial Oxford University Press), 4° ed.

Jurisprudencia nacional

Corte de Apelaciones de San Miguel: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 3221-2019, de 10 de noviembre de 2020.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Degollados: Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Nattino*. Rol 16196-1994, sentencia de 30 de septiembre de 1994.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Juan Alegría*. Rol 71835-1998, sentencia de 19 de julio de 2000.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Londres 38. Torturas*. Rol 1550-2015, sentencia de 23 de mayo de 2016.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Caso Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal*. Rol 4160-2018, sentencia de 23 de noviembre de 2021.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Episodio Eva Palominos Rojas y Patricia Zúñiga Barros*. Rol 1104-2016, sentencia de 29 de agosto de 2017.

Corte de Apelaciones de Santiago: *Pérez Martínez, Rodrigo con Comisión de Libertad Condicional*. Rol 360-2020 (Amparo), sentencia de 28 de febrero de 2020.

Corte Suprema: *Caso Caravana, Episodio La Serena*. Rol 5780-2023, sentencia de 28 de diciembre de 2023.

Corte Suprema: *Caso Caravana, Episodio Valdivia*. Rol 122163-2020, sentencias de casación y de reemplazo de 16 de junio de 2023.

Corte Suprema: *Caso Degollados (Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino)*. Rol 31030-1994, sentencia de 27 de octubre de 1995.

Corte Suprema: *Caso Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Abraham Muskatblit Eidelstein y José Carrasco*. Rol 2406-2008, sentencias de casación y de reemplazo de 13 de agosto de 2009.

Corte Suprema: *Episodio Hermanos Vergara Toledo*. Rol 7089-2009, sentencia de 4 de agosto de 2010.

Corte Suprema: *Caso Jécar Nehgme*. Rol 4427-2007, sentencia de casación de 28 de enero de 2009.

Corte Suprema: *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 149250-2020, sentencia de reemplazo de 14 de junio de 2022.

Corte Suprema: *Caso Patricio González*. Rol 206-2020, sentencia de 15 de noviembre de 2022.

Corte Suprema: *Caso Pisagua (Michel Nash y otros)*. Rol 8945-2018, sentencia de 8 de febrero de 2021.

- Corte Suprema: *Caso Tucapel Jiménez*. Rol 3231-2003, sentencia de 9 de marzo de 2004.
- Corte Suprema: *Caso Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal*. Rol 7885-2022, sentencia de 28 de agosto de 2023.
- Corte Suprema: *Comando Conjunto, Episodio José Weibel Navarrete y otros*. Rol 18762-2019, sentencia de casación de 19 de julio de 2022.
- Corte Suprema: *Episodio Lonquén*. Rol 30170-2017, sentencia de casación 18 de junio de 2018.
- Corte Suprema: *Episodio Los 5 desaparecidos de 1987*, Rol 8642-2015, sentencias de casación y de reemplazo 21 de marzo de 2017.
- Corte Suprema: *Episodio Parral*. Rol 3587-2005, sentencia de casación 27 de diciembre de 2007.
- Corte Suprema: *Exhumación ilegal desaparecidos desde “La Moneda”*. Rol 4087-2008, sentencia de casación de 13 de agosto de 2009.
- Corte Suprema: *Sáez Mardones, Alejandro y otro / Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago*. Rol 9331-2015, sentencia de 11 de agosto de 2015.
- Corte Suprema: *Operación Albania*. Rol 1621-2006, sentencia de 28 de agosto de 2007.
- Corte Suprema: *Operación Colombo, Episodio Pedro Poblete Córdova*. Rol 50341-2020, sentencias de casación y de reemplazo de 8 de septiembre 2023.
- Corte Suprema: *Pérez Martínez, Rodrigo con Comisión de Libertad Condicional*. Rol 24962-2020, sentencia de 11 de marzo de 2020.
- Ministro de Fuero Sr. Alejandro Solís, Rol 2182-98 “Episodio Parral”, sentencia de 4 de agosto de 2003.
- Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Milton Juica, 6º Juzgado del Crimen de Santiago, *Caso Degollados (Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino)*. Rol 118.284, sentencia de 31 de marzo de 1994.
- Ministra en Visita Extraordinaria Sra. Marianela Cifuentes, *Caso Paine, Episodio Principal*. Rol 4-2002, sentencia de 29 de octubre de 2019.

Jurisprudencia internacional

Corte IDH: *Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia*, sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Corte IDH: *Caso Vargas Areco vs. Paraguay*, sentencia de 26 de septiembre de 2006.

Corte IDH: *Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala*, sentencia de 15 de septiembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Corte IDH: *Caso Hilarie, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago*, sentencia de 21 de junio de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas).

Corte IDH: *Caso Vega González y otros vs. Chile*, sentencia de 12 de marzo de 2024 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).